SENTENCIA NÚM.: 159/12

Ilustrísimos Sres.:

MAGISTRADOS

DOÑA ROSA MARÍA ANDRÉS CUENCA

DON GONZALO CARUANA FONT DE MORA

DOÑA MARÍA ANTONIA GAITÓN REDONDO

En Valencia a siete de mayo de
dos mil doce.

Vistos por la Sección Novena de la Ilma. Audiencia Provincial de Valencia, siendo Ponente la Ilma. Sra. Magistrada **DOÑA MARÍA ANTONIA GAITÓN REDONDO**, el presente rollo de apelación número 000092/2012, dimanante de los autos de Juicio Ordinario - 001021/2010, promovidos ante el JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUMERO 22 DE VALENCIA, entre partes, de una, como demandante apelante a EXCAVACIONES S.L. representada por la Procuradora de los Tribunales doña MARIA ANGELES MAS VICTORIA y asistido del Letrado don ENRIQUE CLIMENT ESPINOS y de otra, como demandada apelante a CATALUNYA BANC, S.A., representada por el Procurador de los Tribunales don FRANCISCO JAVIER BARBER PARIS, y asistida del Letrado DON IGNASI FERNADEZ DE SENESPLEDA, en virtud del recurso de apelación interpuesto por EXCAVACIONES S.L. y CATALUNYA BANC, S.A..

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La Sentencia apelada pronunciada por el Ilmo. Sr. Magistrado de Primera Instancia de JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUMERO 22 DE VALENCIA en fecha 18 de julio de 2011, contiene el siguiente FALLO: "Que estimando parcialmente la demanda presentada por la Procuradora D^a. MARIA ANGELES MAS VICTORIA en nombre de EXCAVACIONES S.L., contra CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA representada por el Procurador D. FRANCISCO JAVIER BARBER PARIS, declaro nulo el contrato denominado "Collar con barreras y compensación" de 14 de Febrero de 2008, debiendo la parte demandada devolver el saldo resultante, una vez presentada la oportuna liquidación, que comprenda las partidas de abono y cargo, sin interés ni costas. Se desestima la demanda en lo demás." Procediéndose en fecha 6 de septiembre de 2011, a dictar auto de aclaración de sentencia, el cual contiene la siguiente parte dispositiva: "Estimar la petición formulada por la parte actora de aclarar la sentencia dictada en fecha 18 de julio de 2011, en el presente procedimiento, en el sentido de que donde dice:"... una vez presentada la oportuna liquidación, que comprenda las partidas de abono y cargo", debe decir : " ... que asciende a

26.689,74 euros (veintiséis mil seiscientos ochenta y nueve euros con setenta y cuatro céntimos)".

SEGUNDO.- Que contra la misma se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación por EXCAVACIONES S.L. y CATALUNYA BANC, S.A., dándose el trámite previsto en la Ley y remitiéndose los autos a esta Audiencia Provincial, tramitándose la alzada con el resultado que consta en las actuaciones.

TERCERO.- Que se han observado las formalidades y prescripciones legales.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- En autos de juicio ordinario se dictó sentencia por el Juzgado de la instancia por la que se estimaba parcialmente la demanda formulada por la representación procesal de la entidad EXAVACIONES S.L. contra la entidad CATALUNYA BANC SA, -antes CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA-, en solicitud de nulidad de contrato y reclamación de cantidad.

Interpone recurso de apelación contra dicha resolución la entidad demandante solicitando que, además de los pronunciamientos contenidos en la sentencia, se condene a la demandada al pago de los intereses legales devengados desde la fecha de la interpelación judicial, tal y como se solicitó en la demanda de conformidad con lo establecido en el artículo 1100 del Código Civil, siendo que expresamente se determinaba en su escrito rector el importe de la cantidad que se reclamaba a consecuencia de la nulidad del contrato suscrito con la entidad actora. Añade que, igualmente procede la condena en costas de la demandada, ex artículo 394 LEC, ya que al estimarse su pretensión de condena al pago de los intereses se produciría una estimación total de su pretensión.

También interpone recurso de apelación la representación de la entidad demandada alegando no concurrir los requisitos necesarios para la declaración de nulidad del contrato por vicio del consentimiento. Indica que según resulta de la declaración de la legal representante de la entidad actora, y tras la firma de un primer contrato de SWAP en 2007, se procedió a suscribir el que es objeto de autos, tratándose de una empresa con un importante volumen de facturación -más de 3.500.000 Euros-, no una pequeña empresa, que había concertado con la apelante importantes operaciones de financiación. Añade que se le entregó el folleto informativo previo, firmándose por la contraria la orden de contratación, conteniéndose en tal documento todas las condiciones de la cobertura, que no resultan complejas, y advertencias correspondientes que igualmente se reflejan en el documento de confirmación. Tras la firma se giraron liquidaciones positivas, de las que ninguna queja se tuvo, siendo que además tal firma se produjo en momento en que se preveía una subida de los puntos de interés, no resultando posible extraer la conclusión, de la documentación aportada, de que la entidad bancaria conociera que los tipos de interés iban a bajar, factor éste ajeno a la recurrente. Por otra parte, señala, ha de estarse a una interpretación restrictiva en cuanto a la concurrencia de los vicios del consentimiento, dado su carácter excepcional, reiterando a este respecto estar en presencia de una empresa de importante volumen de facturación, sin que pueda tener acogida la alegación de que la legal representante firmó sin leer el contrato y estimando acreditado haberse ofrecido a la contraparte la necesaria información a los efectos de la suscripción del contrato de autos. Tras la cita de sentencias que estima de aplicación al caso, termina solicitando nueva sentencia por la que se desestime la demanda inicial de las actuaciones, con imposición de costas a la parte actora.

Ambas partes formularon oposición al recurso de apelación de la contraria, con arreglo a las alegaciones contenidas en sus respectivos escritos que constan unidos a los autos.

SEGUNDO.- No obstante el orden en que fueron presentados los recursos de apelación, ha de resolverse en primer lugar el recurso formulado por la mercantil CATALUNYA BANC pues, en su caso, una eventual estimación del mismo haría innecesario abordar los motivos del recurso de apelación formulados por la mercantil EXCAVACIONES SL (en adelante MICÓ).

Según resulta de los autos, la entidad suscribió en fecha 25 de septiembre de 2007 con la entidad CATAÑUNYA BANC "SWAP CRECIENTE CON BARRERA Y COMPENSACIÓN" con un importe nominal de 600.000 Euros, contrato éste suscrito al amparo del contrato marco de operaciones financieras firmado en 24 de septiembre de 2007; dicho contrato "SWAP" fue cancelado el 14 de febrero de 2008, fecha esta en la que las partes -también al amparo del contrato marco de operaciones financieras- suscriben "CONFIRMACIÓN COLLAR CON BARRERAS Y COMPENSACIÓN", con un importe nominal de 1 millón de Euros, fecha de inicio de 1 de abril de 2008 y fecha de vencimiento de 1 de abril de 2011, al tipo máximo de 4'490%, con una barrera de desactivación del tipo máximo del 5'100% y una barrera de activación del tipo mínimo del 3'490%, siendo el tipo de referencia de liquidación el Euribor a 3 meses. El apartado 4 del condicionado del contrato, bajo el título "Declaración de riesgos", establece "las partes declaran ser totalmente conscientes del riesgo de volatilidad inherente a la celebración de esta Operación, cuyo valor de mercado puede variar rápidamente como consecuencia de variaciones en los tipos de interés, tipos de cambio u otros parámetros relevantes de los mercados financieros, También declaran conocer que las obligaciones que surgen de esta Operación requieren una gestión adecuada y una vigilancia constante de la evolución de los mercados financieros y de las posiciones que las Partes asumen en los mismos, para lo cual son necesarios medios y conocimientos suficientes de la operativa de tales mercados", y más abajo se añade "En cumplimiento de la normativa sobre protección de los inversores en instrumentos financieros ponemos en su conocimiento que no es posible determinar la conveniencia de esta inversión al no haber sido posible realizar el test de conveniencia; por tanto, Caixa Catalunya queda exonerada de responsabilidad por la realización de dicha inversión".

En relación con la concurrencia del requisito del consentimiento de la entidad demandante a los efectos de valorar que no concurre motivo de nulidad del contrato, la parte ahora recurrente alega que no se trataba de una pequeña empresa dado su volumen de facturación, que se le facilitó el folleto informativo (doc. 6 de la contestación), que las condiciones de la cobertura no eran complejas, que el documento contenía la advertencia de los riesgos y que la falta de lectura del contrato por parte del legal representante no puede servir a los efectos de apreciar el error excusable en la prestación del consentimiento. Con todo, y siendo cierto que la ausencia de lectura de las condiciones del contrato previa a la firma del mismo podría en su caso determinar la imputabilidad del error a quien dice haberlo tenido, no menos cierto es que, como dijimos en sentencia de 6 de octubre de 2010 (R.A 366/10, Pte. Sr. Caruana), "La existencia del error invalidante del consentimiento contractual es una mera cuestión de hecho a solventar por su propia naturaleza conforme a la probanza practicada (sentencia Tribunal Supremo 25-2-1995 y 26-2-1998, entre otros) y es por ello que si bien, existe en la casuística jurisprudencial resoluciones de Audiencias Provinciales que han sancionado por esa razón la nulidad de contratos semejantes al ahora enjuiciado (SAP Asturias 27/1/2010 y 23/7/2010 y SAP Pontevedra 7/4/2010) y otras que han dictaminado su validez,

(SAP Madrid, secc. novena, 10/7/2009 y SAP Ávila 9/9/2010), la solución del supuesto pasa por estar para tal efecto a las propias circunstancias que concurren en el presente caso”, añadiendo que *“El acceso cada vez mayor por los pequeños inversores al mercado financiero y las dificultades o complejidades que ello implica, ha motivado la imposición en el ordenamiento legal de unas normas de conducta para las entidades de crédito o financieras tendentes a la protección de los inversores en las que se exige una determinada actuación informativa a desplegar por la entidad financiera en cuestión con carácter previo y con un contenido o características señaladas por el propio legislador. Así la Ley de Mercado de Valores 24/1998 de 28 de julio cuya aplicación a la operación enjuiciada (artículo 2) no es objeto de discusión y está sobradamente aceptada por la demandada, modificada por la Ley 47/2007 de diciembre de 2007 que traspone, entre otras, la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los mercados de instrumentos financieros, (no íntegramente) en el ordenamiento español, tras proclamar el deber de transparencia y diligencia de esas entidades, su artículo 79 bis enunciado como deber de información, exige a la entidad financiera un actuar con claridad, imparcialidad y no engañoso y por tanto la información que ha de practicarse como señala el art. 79 bis-2, ha de implicar que el cliente pueda, en palabras del legislador, “tomar decisiones sobre las inversiones con conocimiento de causa ” (art. 79 bis-3), es decir, que el cliente ha de conocer y comprender el alcance y contenido de la operación, el riesgo que asume y sólo cuando conoce tales aspectos decidir si acepta o no la operación.” Finalmente se indicaba, “Respecto al perfil del cliente del que depende la norma de conducta informativa por la entidad bancaria, no se discute la cualidad de minorista de la entidad actora y que nos encontramos ante una operación de comercialización de producto y no de asesoramiento; circunstancias que obligan a la entidad en la fase informativa a tenor del artículo 79 bis 7) de la Ley Mercado Valores a practicar el llamado test de conveniencia (conforme al artículo 73 del RD 218/2008 citado) y ello no responde sino a cumplimentar que el cliente conozca y comprenda en los términos expuestos supra, la operación a suscribir”.*

Pues bien, en el caso de autos, y pese al tenor literal del contrato arriba transcrito en lo que a esta cuestión interesa, no consta el cumplimiento por parte de la entidad bancaria de la normativa MiFID vigente a la fecha de la contratación, sin que a la presente resolución pueda servir de guía, como pretende la entidad Catalunya Banc, lo dicho por esta misma Sala en sentencia de 18 de julio de 2011 (R.A 435/11), en tanto se trataba de supuesto en el que había quedado acreditado que la parte contratante había manifestado expresamente su voluntad de no hacer el test, lo que hacía de aplicación al caso la previsión contenida en el artículo 19.5 de la Directiva 2004/39/CE, mientras que en el caso de autos el resultado del test de conveniencia que aparece unido al folio 223, y en el que aparece relleno el cuadro correspondiente a la expresión “no deseo hacer el test”, no consta firma alguna, habiéndose negado expresamente por la entidad actora haberle sido solicitado la realización del test de conveniencia. A este respecto se ha de tener en cuenta el artículo 19 de la Directiva, que fija las normas de conducta para la prestación de servicios de inversión a clientes con arreglo a los siguientes términos:

- “1. Los Estados miembros exigirán que, cuando preste servicios de inversión o, en su caso, servicios auxiliares a clientes, la empresa de inversión actúe con honestidad, imparcialidad y profesionalidad, en el mejor interés de sus clientes, y observe, en particular, los principios establecidos en los apartados 2 a 8.*
- 2. Toda la información, incluidas las comunicaciones publicitarias, dirigidas por la empresa de inversión a los clientes o posibles clientes serán imparciales, claras y no engañosas. Las comunicaciones publicitarias serán claramente identificables como tales.*

3. Se proporcionará a los clientes o posibles clientes de manera comprensible información adecuada sobre:

- la empresa de inversión y sus servicios,
- los instrumentos financieros y las estrategias de inversión propuestas; esta información debería incluir orientaciones y advertencias apropiadas acerca de los riesgos asociados a las inversiones en esos instrumentos o en relación con estrategias de inversión particulares,
- centros de ejecución de órdenes, y
- gastos y costes asociados,

de modo que les permita, en lo posible, comprender la naturaleza y los riesgos del servicio de inversión y del tipo específico de instrumento financiero que se ofrece y, por consiguiente, puedan tomar decisiones sobre la inversión con conocimiento de causa. Esta información podrá facilitarse en un formato normalizado.

4. Al prestar asesoramiento en materia de inversiones o realizar gestión de carteras, la empresa de inversión obtendrá la información necesaria sobre los conocimientos y experiencia en el ámbito de inversión correspondiente al tipo concreto de producto o servicio, la situación financiera y los objetivos de inversión del cliente o posible cliente, con el fin de que la empresa pueda recomendarle los servicios de inversión e instrumentos financieros que más le convengan.

5. Los Estados miembros se asegurarán de que las empresas de inversión, cuando presten servicios de inversión distintos de los contemplados en el apartado 4, pidan al cliente o posible cliente que facilite información sobre sus conocimientos y experiencia en el ámbito de inversión correspondiente al tipo concreto de producto o servicio ofrecido o solicitado, de modo que la empresa de inversión pueda evaluar si el servicio o producto de inversión previsto es adecuado para el cliente.

En caso de que la empresa de inversión, basándose en la información recibida en virtud del apartado anterior, considere que el producto o servicio no es adecuado para el cliente o posible cliente, deberá advertirle de su opinión. Esta advertencia podrá facilitarse en un formato normalizado.

En caso de que el cliente o posible cliente decida no facilitar la información solicitada a la que se refiere el párrafo primero o no facilite información suficiente en relación con sus conocimientos y experiencia, la empresa de inversión advertirá al cliente o posible cliente de que dicha decisión impide a la empresa determinar si el servicio o producto previsto es adecuado para él. Esta advertencia podrá facilitarse en un formato normalizado.

6. Los Estados miembros permitirán que, cuando las empresas de inversión presten servicios de inversión que se limiten exclusivamente a la ejecución o recepción y transmisión de órdenes de clientes, con o sin prestación de servicios auxiliares, dichas empresas presten dichos servicios de inversión a sus clientes sin necesidad de obtener la información o hacer la valoración mencionadas en el apartado 5 cuando se cumplan todas las condiciones siguientes:

- que dichos servicios se refieran a acciones admitidas a cotización en un mercado regulado o en un mercado equivalente de un tercer país, a instrumentos del mercado monetario, obligaciones u otras formas de deuda titulizada (excluidas las obligaciones o los valores de deuda titulizada que incluyan derivados), OICVM y otros instrumentos financieros no complejos. Se considerará que un mercado de un tercer país es equivalente a un mercado regulado sin cumple unos requisitos equivalentes a los establecidos en el título III. La Comisión publicará una lista de los mercados que deben considerarse equivalentes. Esta lista se actualizará periódicamente,
- que el servicio se preste a iniciativa del cliente o posible cliente,
- que se haya informado claramente al cliente o posible cliente de que en la prestación de dicho servicio la empresa de inversión no está obligada a evaluar la adecuación del

instrumento ofrecido o del servicio prestado y de que, por tanto, el cliente no goza de la correspondiente protección de las normas de conducta pertinentes; esta advertencia podrá facilitarse en un formato normalizado,

- que la empresa de inversión cumpla las obligaciones que le impone el artículo 18.

7. La empresa de inversión creará un registro que incluya el documento o documentos objeto del acuerdo entre la empresa y el cliente que estipulen los derechos y las obligaciones de las partes y las demás condiciones en las que la empresa prestará servicios al cliente. Los derechos y las obligaciones de las partes en el contrato podrán indicarse mediante referencia a otros documentos o textos jurídicos.

8. El cliente deberá recibir de la empresa de inversión informes adecuados sobre el servicio prestado a sus clientes. Dichos informes incluirán, en su caso, los costes de las operaciones y servicios realizados por cuenta del cliente.

9. En caso de que se ofrezca un servicio de inversión como parte de un producto financiero que ya esté sujeto a otras disposiciones de la legislación comunitaria o a normas europeas comunes para entidades de crédito y créditos al consumo relativas a la valoración de riesgos de los clientes o a los requisitos de información, dicho servicio no estará sujeto además a las obligaciones establecidas en el presente artículo.

10. Para asegurar la necesaria protección de los inversores y la aplicación uniforme de los apartados 1 a 8, la Comisión adoptará, de conformidad con el procedimiento mencionado en el apartado 2 del artículo 64, medidas de ejecución que garanticen que las empresas de inversión cumplan los principios en ellos mencionados cuando presten servicios de inversión o auxiliares a sus clientes. Estas medidas de ejecución detalladas tendrán en cuenta:

a) la naturaleza del servicio o servicios ofrecidos o prestados al cliente o posible cliente, teniendo en cuenta el tipo, objeto, magnitud y frecuencia de las operaciones;

b) la naturaleza de los instrumentos financieros que se ofrecen o se prevé ofrecer;

c) el carácter particular o profesional del cliente o posible cliente”.

Como ya se ha indicado, no consta la previa realización del test de conveniencia sin que tampoco concorra prueba de la negativa por parte del cliente a su realización, siendo necesario tener en cuenta que, conforme a la graduación de la tipología del cliente que se establece en la normativa MiFID a los efectos de determinar y valorar las normas de conducta en las relaciones con los clientes, la entidad tiene la consideración de minorista, y por tanto con el mayor nivel de protección, y no de cliente profesional en tanto ésta última –que parece pretender la parte apelante al alegar de forma reiterada la contratación de la mercantil actora con la Administración del Estado y Comunidad Autónoma – exige conforme al artículo 78 bis 3.c) de la Ley del Mercado de Valores que se trate de una empresa que reúna, al menos, dos de las siguientes condiciones, el total de las partidas del activo igual o superior a 20 millones de euros, el importe de su cifra anual de negocios igual o superior a 40 millones de euros, y recursos propios iguales o superiores a 2 millones de euros, criterios éstos de valoración económica que no han resultado acreditados en autos; por ello, y con independencia de que por se hubiera realizado la contratación de un producto “SWAP” anterior en el tiempo al contrato “Collar con Barreras y Compensación” -cuyas condiciones y características no son iguales-, la entidad CATALUNYA BANC debió realizar el test de conveniencia con carácter previo a su contratación, sin que, además, pueda olvidarse a este respecto la evidente relación de confianza existente entre el director de la oficina bancaria en que se verificó la contratación y los legales representantes de la mercantil –lo que así resulta incluso de la forma en que dichas personas se dirigieron unas a otras en el acto de la vista al momento de la declaración del director de la oficina Sr. Espada-, determinante de que la Sra. Leiva Jara firmase dicho contrato sin proceder previamente a su lectura, y ello aún no dándole a esta última circunstancia el valor de error inexcusable.

En definitiva, el contrato "Collar con Barreras y Compensación" debe considerarse un instrumento financiero complejo conforme a lo establecido en el apartado 8 del artículo 79 bis de la Ley del Mercado de Valores, al establecer dicho precepto que "no se considerarán instrumentos financieros no complejos... (ii) los instrumentos financieros señalados en los apartados 2 a 8 del artículo 2 de esta Ley", quedando incluidos en el apartado 2 del citado artículo 2, "contratos de opciones, futuros, permutas, acuerdos de tipos de interés a plazo y otros contratos de instrumentos financieros derivados relacionados con valores, divisas, tipos de interés o rendimientos, y otros instrumentos financieros derivados, índices financieros o medidas financieras que puedan liquidarse en especie o en efectivo". Como tal producto complejo, y dada la condición de minorista de la mercantil [redacted], la entidad CATALUNYA BANC debió de realizar el test de conveniencia a los efectos de valorar si el producto era adecuado para el cliente (art. 79 bis LMV), por lo que faltando el cumplimiento de tal obligación y dada la difícil comprensión del producto y el carácter ininteligible no solo de su clausulado sino también de las estipulaciones contenidas en el contrato marco de operaciones financieras (24/09/2007) -f.206-, no cabe más que concluir la confirmación del pronunciamiento a este respecto contenido en la sentencia dictada en la instancia.

TERCERO.- La representación procesal de la entidad [redacted] solicita por vía del recurso de apelación la condena de la entidad demandada al pago de los intereses legales devengados desde la fecha de interposición de la demanda -artículos 1100 y 1101 Código Civil-, pues la sentencia había dado lugar a la cantidad reclamada en la demanda. Así mismo, y dada la estimación total que de todas las pretensiones se produciría en tal caso, solicita la condena en costas de la demandada conforme a lo previsto en el artículo 394 LEC.

Ciertamente la entidad actora fijó en su escrito rector la pretensión de condena de la entidad demandada al pago de 26.689'74 Euros, más el interés legal desde la fecha de la demanda, pero no menos cierto es que dicho pronunciamiento condenatorio deriva de la previa declaración judicial de nulidad del contrato "Collar con Barreras y Compensación". Para que se produzca la mora es requisito indispensable que se trate de una obligación exigible, vencida y determinada o líquida, lo que al caso solo cabe predicar desde el momento en que se dictó la sentencia de la primera instancia, pues es en este momento cuando nació para las partes litigantes la obligación de entrega de las recíprocas prestaciones (en este caso por compensación) como consecuencia de la declaración judicial de la nulidad del contrato. De este modo, la pretensión de la parte actora en relación con el devengo de los intereses legales sólo es estimable desde la fecha de la sentencia de la primera instancia.

No produciéndose una estimación íntegra de las pretensiones de la parte actora, ha de estarse al tenor del artículo 394 de la LEC y, por ende, mantener el pronunciamiento que al respecto contiene la sentencia de la instancia.

CUARTO.- Conforme a lo previsto en el artículo 398 de la LEC, se imponen a la entidad demandada las costas causadas por su recurso de apelación y no se hace expresa imposición de las costas causadas en esta alzada.

Vistos los preceptos legales aplicables concordantes y demás de general y pertinente aplicación.

FALLO

Estimando en parte el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la mercantil EXCAVACIONES SL, y desestimando el recurso de apelación formulado por la representación de la entidad CATALUNYA BANC SA, ambos contra la sentencia de fecha 18 de julio de 2011 –aclarada por Auto de 6 septiembre de 2011-, dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 22 de Valencia en autos de juicio ordinario nº 92/2012, revocamos parcialmente dicha resolución, y en su lugar, se declara nulo el contrato “Collar con Barreras y Compensación” de 14 de febrero de 2008, condenando a la entidad demandada, CATALUNYA BANC SA a la devolución del saldo resultante que asciende a 26.689’74 Euros, con más los intereses legales devengados por dicha cantidad desde la fecha de la sentencia apelada (18/07/2011), y sin hacer expresa imposición de las costas causadas en la primera instancia.

Se imponen a CATALUNYA BANC SA las costas causadas en esta alzada por su recurso de apelación y no se hace expresa imposición de las devengadas por el recurso de la entidad EXCAVACIONES SL.

Se acuerda la pérdida por la recurrente CATALUNYA BANC SA del depósito constituido para apelar.

Se acuerda la devolución a EXCAVACIONES SL del depósito constituido para recurrir en apelación.

Notifíquese esta resolución a las partes y, de conformidad con lo establecido en el artículo 207.4 Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, una vez transcurridos los plazos previstos, en su caso, para recurrir sin haberse impugnado, quedará firme, sin necesidad de ulterior declaración; procediéndose a devolver los autos originales, junto con certificación literal de la presente resolución y el oportuno oficio, al Juzgado de su procedencia.

Así, por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo, la pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Que la anterior sentencia ha sido leída y publicada por el Ilmo. Sr. Magistrado que la dicto, estando celebrando Audiencia Pública la Sección Novena de la Audiencia Provincial en el día de la fecha. Doy fe.

DILIGENCIA DE CONSTANCIA.- La extiendo yo, el Secretario judicial, para hacer constar y advertir a las partes de que en el supuesto de que proceda, teniendo en cuenta los requisitos legalmente establecidos y dado el carácter extraordinario de los mismos, la **INTERPOSICIÓN** de recurso de casación y/o extraordinario por infracción procesal contra la anterior resolución, conforme a lo establecido en el artículo segundo de la Ley 1/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial (BOE 4/11/09), requiere la consignación de la cantidad de 50 € en la Cuenta de Consignaciones que esta Sección tiene abierta en la entidad BANESTO; siendo el número de expediente: 4557-0000-12-(número de rollo de apelación)-(año), indicando, en el campo “concepto” el código “00 Civil-Casación” y la fecha de la resolución recurrida con el formato DD/MM/AAAA En el caso de realizar el ingreso mediante transferencia bancaria, tras completar el Código de Cuenta Corriente (CCC, 20 dígitos), se indicará en el campo “concepto” el número de cuenta el código y la fecha que en la forma expuesta anteriormente; debiéndose verificar un ingreso por cada uno de los recursos que se preparen; doy fe.